

En lo que se refiere a la normativa de protección de datos personales, el proyecto modifica el artículo 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, para añadir un apartado u) en su art. 9.1 con la finalidad de incluir, como dato de obligada anotación a la hora de inscribir una sentencia firme en el Sistema de Registros de Apoyo a la administración de Justicia, la profesión de la persona condenada, en los casos en los que dicha profesión sea relevante por haber recaído sobre aquella una pena de inhabilitación para profesión u oficio, así como en los supuestos de penas de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

A este respecto cabe recordar que el art. 10 de la LOPDGDD, en sus apartados 1 y 2, establece:

*Artículo 10. Tratamiento de datos de naturaleza penal.*

*1. El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.*

*2. El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.*

El objetivo del presente proyecto sería precisamente posibilitar la adecuada ejecución de una sentencia penal relativa a la inhabilitación para ejercer determinadas profesiones u oficios, o la de inhabilitación especial para determinados casos, para lo cual se requiere con carácter necesario la constancia de dicha profesión u oficio en el registro mediante el nuevo apartado u) en su artículo 9. Dicha constancia, además, servirá para dar ejecución al mecanismo de alerta previsto en el art. 56 bis de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento

(UE) nº 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI») en la redacción dada por la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013.

En consecuencia, esta Agencia considera que nos encontraríamos ante un supuesto previsto en el art. 10.2 LOPDGDD, y en el que no habría propiamente una finalidad diferente de la ejecución de la condena penal. Pero, en cualquier caso, la existencia de las citadas Directivas 2005/36 y 2013/55 serían base suficiente para el tratamiento previsto conforme al art. 10.1 LOPDGDD.

Por lo tanto, esta Agencia informa favorablemente a la modificación propuesta.